



PRIMERA SALA REGIONAL COLEGIADA EN MATERIA CIVIL,
ZONA 01 TUXTLA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE CHIAPAS.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 9 nueve de
agosto del año 2024 dos mil veinticuatro.- - - - -

V I S T O para resolver los autos del toca número **197-B-1C01/2022, TERCER SUBSECUENTE**, formado con motivo al recurso de apelación interpuesto por **** ***** ****, en contra del **auto de 17 diecisiete de mayo de 2024 dos mil veinticuatro**, pronunciado por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de TUXTLA, con residencia en esta ciudad; en los autos del expediente número **1141/2021**, relativo a la **VIA DE CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR (REGIMEN DE VISITA Y CONVIVENCIA)**, promovido por **** ***** ****, en contra de *** ***** ****; y, - - - - -

R E S U L T A N D O:

1º.- En la fecha arriba señalada y dentro del procedimiento de referencia, la Juez del conocimiento dictó el auto recurrido que a continuación se transcribe: - - - - -

*JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA.- TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A 17 diecisiete de mayo de 2024 dos mil veinticuatro.- Se tiene por presentada la Ciudadana *** ***** ****, con su escrito recibido el día 14 catorce de mayo de 2024 dos mil veinticuatro, por medio del cual, por su propio derecho, viene a promover Incidente de Guarda y Custodia de su hija de iniciales **M.E.G.C.**; al respecto, y analizado el escrito de cuenta, se advierte que si bien la promoción viene dirigida al expediente en que se actúa, en el que efectivamente se observa que se trata de las mismas partes, y que de los datos del proemio se indica INCIDENTE DE GUARDA Y CUSTODIA, en donde peticiona medida provisional; y analizados que fue el escrito de cuenta se advierte que no reúne los requisitos establecido en el artículo 268 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, por lo que de conformidad con el artículo 72 del Código de Procedimientos*

Civiles, se le dice a la promovente que no ha lugar a dar trámite a su incidente, en los términos planteados, POR NOTORIAMENTE FRÍVOLO E IMPROCEDENTE.- Sin embargo, y al advertirse que del juicio principal lo es la CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR JUICIO DE RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIA de su menor hija de iniciales M.E.G.C., sobre lo cual conviene destacar que por regla general los padres detentan la guarda y custodia de los hijos y pueden ejercerla de común acuerdo, por ello conforme el artículo 4 Constitucional, el varón y la mujer son iguales ante la ley, de ahí la protección y desarrollo de la familia, y que atento a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores pues, en principio, tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos, ante la existencia de situaciones en donde los desacuerdos personales hacen imposible que exista una capacidad conciliatoria, el Estado se encuentra obligado a encontrar mecanismos que garanticen el derecho de los menores de edad a mantener relaciones personales y de trato directo con cada uno de sus padres de forma regular, asegurando la continuación de la convivencia, ya que precisamente el Legislador ha establecido diversas instituciones jurídica tendientes a salvaguardar el derecho-deber de los progenitores a participar activamente en la crianza y educación de sus hijos. Que dentro de estas instituciones se encuentra la fijación de la guarda y custodia a cargo de uno de los padres y paralelamente, el derecho de visita o régimen de convivencia a favor del otro, figuras complementarias entre sí que garantizar el derecho de la persona menor de edad de vivir en familia y convivir con ambos padres, para asegurar así su sano desarrollo de la personalidad. - Así se erige como un derecho primordial de los niños de no ser separados de sus padres, a menos que ello sea necesario en aras de proteger el interés superior de aquéllos, consagrado en el párrafo noveno del artículo 4 Constitucional y 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, de modo que cuando dicha separación ocurre, necesariamente debe establecerse un régimen de visita y convivencia entre el progenitor no custodio y dichos niños, en tanto que tiene derecho a mantener relaciones personales y contacto directo, de un modo regular con el padre que no lo tiene bajo su cuidado, el cual solo puede restringirse o suspender cuando su interés superior así lo requiera, como en el caso que deban ser protegidos de cualquier forma de perjuicio o abuso físico a o mental o trato negligente, malos tratos o explotación.- De modo que, de no existir riesgo alguno, la convivencia debe otorgarse a fin de restablecer lo más pronto posible, el acercamiento entre ambos, medida que, dependiendo de las circunstancias particulares del caso, debe fijarse con las restricciones adecuadas, pero no suprimirse de manera tajante, pues ello iría en detrimento del interés superior de la infante, sin que lo alegado por la demandada en el sentido de que el actor ha incumplido con sus obligaciones alimentarias, sea una causa suficiente para tener por demostrada la existencia de una oposición fundada al ejercicio de los derechos de visita y convivencia que le asiste como padre, por cuanto que la ley no sanciona dicho incumplimiento con la privación del derecho de convivencia, que solo

se obtiene por mandato judicial expreso y fundado en causa justa que así lo determine constitucionalmente válido y restrinja el mismo.

- - - En tales condiciones, visibilizado el entorno en el que se ha venido desarrollando la menor de iniciales M.E.G.C., y ante lo manifestado que la infante ha vivido siempre con su progenitora, y que el ciudadano **** * , abandonó la casa habitación en donde vivían desde el mes de Febrero de 2021, y que después de abandonar la casa la amenazó con sustraer ilegalmente del estado a su menor hija, desconociendo actualmente en donde vive el actor antes citado y que se ha negado a proporcionar una dirección en la que se le pueda localizar de forma segura, y que no le interesan ni los derechos, ni garantías de su hija y a pesar de saber que su irresponsabilidad y desinterés afecta los derechos de la misma a una vivienda digna, salud, educación y alimentación, nunca sea hecho cargo de eso, quedando como la única responsable de salvaguardar y cuidar en todos los sentidos a la infante.- En la relatadas circunstancias y de conformidad con los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 3, 7 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 24, 25, 29 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 982 del Código Procesal Civil, SE DECRETA PROVISIONALMENTE LA GUARDA Y CUSTODIA DE LA NIÑA DE INICIALES M.E.G.C., a favor de la progenitora *** * , quien queda obligada de velar por el cuidado e integridad de la misma, la cual puede ser susceptible de modificación.

- - Es aplicable al particular, la Jurisprudencia Número: 1a./J. 31/2014 (10a.), consultable en la Página 451, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto versan de la siguiente manera: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA. Como criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes reseñado vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el

control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social." --- En consecuencia, se ordena dar vista PERSONALMENTE al actor **** ***** ****, en su domicilio autorizado en autos del contenido del escrito presentado, para su conocimiento, en el término de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de su notificación y manifieste lo que a su derecho convenga, APERCIBIDO que de no dar contestación a la vista dentro del término concedido, se tendrá por precluido su derecho; en su oportunidad haga la Secretaría el cómputo correspondiente.-- Se tiene por recibido el oficio PSIC/169/2024, signado por la Licenciada LAURA CRISTINA SÁNCHEZ LÓPEZ, Psicóloga adscrita a este Órgano Jurisdiccional, mediante el cual exhibe las Valoraciones Psicológicas practicadas a las partes **** ***** **** y **** ***** ****, Al efecto, se tienen por exhibidas las valoraciones, quedando enterada de su contenido en sus términos, mandándose a glosar a los presentes autos el oficio de cuenta y anexos que lo acompaña para que obren como correspondan.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE."-- -----

2º.- Inconforme con el auto de referencia **** ***** ****, interpuso recurso de apelación, mismo que le fue admitido por la Juez en el **efecto devolutivo.**- -----

3º.- Los agravios expresados por **** ***** ****, es del tenor literal siguiente: -----

“AGRAVIOS.- FUENTE DE AGRAVIO.- “En tales condiciones, visibilizado el entorno en el que se ha venido desarrollando la menor de iniciales M.E.G.C., y ante lo manifestado que la infante ha vivido siempre con su progenitora, y que el ciudadano **** ***** ****, abandonó la casa habitación en donde vivían desde el mes de Febrero de 2021, y que después de abandonar la casa la amenazó con sustraer ilegalmente del estado a su menor hija, desconociendo actualmente en donde vive el actor antes citado y que se ha negado a proporcionar una dirección en la que se le pueda localizar de forma segura, y que no le interesan ni los derechos, ni garantías de su hija y a pesar de saber que su irresponsabilidad y desinterés afecta los derechos de la misma a



una vivienda digna, salud, educación y alimentación, nunca se ha hecho cargo de eso, quedando como la única responsable de salvaguardar y cuidar en todos los sentidos a la infante.- En las relatadas circunstancias y de conformidad con los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 3,7 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 24, 25, 29 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 982 del Código Procesal Civil, SE DECRETA PROVISIONALMENTE LA GUARDA Y CUSTODIA DE LA NIÑA DE INICIALES M.E.G.C., a favor de la progenitora *** ***** quien queda obligada de velar por el ciudadano e integridad de la misma, la cual puede ser susceptible de modificación.” De la misma forma, la jueza pretende aportar fundamentos de derecho y proposiciones fácticas para sustentar su conclusión: **1.-** “Sobre lo cual conviene destacar que por regla general los padres detentan la guarda y custodia de los hijos y pueden ejercerla de común acuerdo, por ello conforme el artículo 4 Constitucional, el varón y la mujer son iguales ante la Ley, de ahí la protección y Desarrollo de la familia, y que atento a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores”. **2.-** “el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos, ante la existencia de situaciones en donde los desacuerdos personales hacer imposible que existe una capacidad conciliatoria, el Estado se encuentra obligado a encontrar mecanismos que garanticen el derecho de los menores de edad a mantener relaciones personales y de tracto directo de cada uno de sus padres de forma regular”. **3.-** “Así se erige como un derecho primordial de los niños de no ser separados de sus padres, a menos que ello sea necesario en aras de proteger el interés superior de aquéllos, consagrado en el párrafo noveno del artículo 4 Constitucional y 3 de la Convención Sobre los

*Derechos del Niño. 4.- Que el suscrito a incumplido con sus deberes alimentarios, que he presuntamente amenazado con llevarme a mi hija, que he sido irresponsable, desinteresado y que abandone mi domicilio.- En ese sentido, se mencionan normativas constitucionales y convenciones internacionales que protegen los derechos del menor y establecen la necesidad de garantizar su convivencia con ambos padres, **la resolución judicial no presenta congruencia con estos principios.** Toda vez que la juzgadora es parcial, al no respetar la igualdad ante la ley de ambos progenitores. Estos son pues, que no me dio el derecho a defenderme ante la supresión temporal de mi derecho de guarda y custodia sobre mi menor hija. Ni modo menos se escuchó a mi hija, NADIE LO ESCUCHO, siendo ella la principal afectada. Esto es visiblemente incongruente con lo que ella menciona, al referirse a que el Estado tiene que encontrar mecanismos a través de los cuales no permitir que de manera unilateral se elija a un padre sobre otro: Por lo que tampoco es congruente con el interés superior del menor. Al respecto Cipriano Gómez Lara en su obra teoría General del Proceso, Citando a Pedro Aragoneses, en relación con las congruencia de las sentencias, que por congruencia ha de entenderse aquel **principio normativo dirigido a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional**, por el cual debe **existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido, oportunamente, por los litigantes**, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso, al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico. En ese sentido nuestra **Suprema Corte** expresa que por **congruencia** ha de entenderse aquel principio normativo dirigido a **delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional**, por el cual debe haber **identidad entre lo resuelto y lo controvertido**, oportunamente por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico. Así pues como se puede ver en la fuente de este agravio, el juzgador determina la Guarda y Custodia provisional sin escuchar a las partes*



*involucradas, como son mi menor hija y su padre. Cosa que no pasa desapercibida por la Juez, sin embargo, su conclusión no se sigue de sus premisas, **por lo que resulta ilegal**. De sus premisas se observa que debió encontrar mecanismos a su alcance como junta de padres o escuchar a mi hija, lo cual no hizo. Pero lo que si hizo fue decidir unilateralmente suprimir mi derecho y el de mi hija atentando contra el interés superior del menor. Ahora bien, la Juez realiza una indebida valoración probatoria cuando da pleno valor probatorio a las afirmaciones de la demandada. A partir de dichos, sin ningún tipo de evidencia, dándole el grado de certeza. No obstante, dentro del expediente se puede observar todo lo contrario, por lo que o la juez no leyó las constancias que obran dentro del expediente o es imparcial. Esto queda claro cuando se menciona que no he cumplido con la pensión, lo que resulta totalmente falso y de constatación evidente. Dentro de múltiples escritos, donde la demandada menciona esta situación, siempre he contestado que existe una preliminar de consignaciones en el número de expediente 360/2021 del índice del Juzgado Primero. Es decir, llevó años depositando mes con mes de manera ininterrumpida y, ahora resulta que a criterio de la juzgadora no he hecho. Ahora bien, también de valor probatorio pleno a la afirmación de que yo no tengo interés, lo cual es contrario porque yo inicie este procedimiento y llevó años intentado convivir con mi hija, e incluso han multado y apercibido muchas veces a la demandada dentro del proceso que nos ocupa. Tan es así que se han documentado las inasistencias y los múltiples recursos improcedentes donde ella pretende que yo no vea a mi hija y sin embargo, sigo luchando por tener mas contacto con ella, inclusive desde diciembre del año pasado se estableció un régimen de convivencias vía videollamadas que la demandada no ha cumplido y que en las dos llamadas que a respondido se puede apreciar como el teléfono solo apunta a un punto fijo sin que haya nadie. Me parece una desproporción y un abuso afirmar que no he tenido interés. Del mismo modo, como se puede ver*

claramente en el expediente, toda vez que ya pasamos la etapa probatoria, ella fue quien abandonó el domicilio y se fue con sus padres. Del mismo modo, nunca se acreditó que yo haya amenazado con llevarme a mi hija. Lo que si hice es buscar a través de los medios jurídicos a mi disposición un régimen de visitas en la que se me permita llevar a mi hija a visitar a sus abuelos. Por lo que la JUEZA ESTA CRIMINALIZANDO MIS DERECHOS A SOLICITAR CONVIVENCIAS, porque considera con el hecho de ejercer un derecho vigente debo perder la GUARDA Y CUSTODIA DE MI HIJA. Es un atentado en contra de mis derechos y del principio democrático. En ese sentido debería cuidar que DERECHOS PRETENDO EJERCER, toda vez que la jueza pueda interpretarlas en mi contra. Al respecto, en la Jurisprudencia 1ª./J. 74/2005 y 2ª./J. 144/2006, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Alto Tribunal ha establecido los alcances de la garantía de seguridad jurídica, que más tarde fueron compiladas por la tesis IV, 2º..A.50 K (10ª), del cual se desprende que, la fundamentación y motivación previstas en el artículo 16 de la constitución son necesarias para asegurar el respecto al derecho humano de seguridad jurídica, así pues, para motivar, se debe entender al señalamiento con precisión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como propósito primordial, confirmar que al conocer el destinatario del acto el marco normativo en que el acto de molestia surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Además hay que tener en cuenta que la motivación debe no solamente versar sobre la potestad que le confiere la ley para justificar su resolución, sino expresar una serie de razonamientos lógico- jurídicos, sobre el porque consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. Por lo tanto **“no interesa aquí el como se toma la decisión, sino por que”** la decisión tomada



*debe ser considerada correcta. En esto estriba la justificación de las decisiones judiciales, **manifestar las razones por las cuales se considera que la tomada en el caso concreto es la mejor decisión correcta.** El juez en el caso concreto no expresa en absoluto las razones por las cuales ha alcanzado esa conclusión probatoria, pues si bien, esa falta de motivación pudiera ser en realidad un fallo de razonamiento, pero no es posible saberlo, precisamente porque la motivación es insuficiente. Solo se basó en la falsa declaración de una de las partes para suprimir un derecho. No obstante, ¿En realidad esto explica por qué resto valor probatorio a las constancias que obran en el expediente? Claramente no, y aquí es donde no se encuentra la utilización de la Sana Crítica, es decir un adecuado entendimiento que implica la unión de la lógica y la experiencia, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento a través de los procesos sensibles e intelectuales que lleven a la correcta apreciación de los hechos”.*

4.- Por auto de 27 veintisiete de junio de 2024 dos mil veinticuatro, esta sala formó el toca número **197-B/IC01/2022, tercer subsecuente**, y por auto de 8 ocho de julio del año en curso, se dio cumplimiento a la reserva decretada, confirmando la calificación del grado hecha por la juez natural, tuvo por legalmente admitido el recurso en el efecto devolutivo, se citó a las partes para oír sentencia.- - - - -

C O N S I D E R A N D O:

I.- Que esta Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado; es competente para conocer y resolver sobre el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 686-A, del Código de Procedimientos Civiles 49 y 59 fracción I, del Código de Organización del Poder Judicial

ambos del Estado de Chiapas, por impugnarse una resolución de un juzgado de primera instancia ubicado dentro del ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción ésta Sala Civil.- - - - -

II.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 663, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, el recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal de Segunda instancia confirme, revoque o modifique la determinación judicial combatida.- - - - -

III.- Antes de dar inicio a los motivos de inconformidad en contra del auto de 17 diecisiete de mayo de 2024 dos mil veinticuatro, es preciso destacar que del escrito sin fecha presentado el 29 veintinueve del citado mes y año, suscrito por el recurrente **** ***** ****, se advierte que en su orden lógico expresó como agravio esencialmente, lo siguiente: - - - -

El hoy apelante arguye que le causa lesión el auto de 17 diecisiete de mayo de esta anualidad, toda vez que la primiinstancial decretó provisionalmente la guarda y custodia de su menor hija de iniciales M.E.G.C., a favor de su progenitora *** ***** ****, determinación que es incongruente con los principios señalados en el auto recurrido, toda vez que la juez natural es parcial al no respetar la igualdad ante la ley de ambos progenitores ya que no le dio el derecho a defenderse ante la suspensión temporal de su derecho de guarda y custodia, ni se escuchó a la menor. Por tanto, dicha determinación es ilegal, ya que la jueza natural realizó una valoración probatoria en la que dio pleno valor a las afirmaciones de la demandada; a partir de dichos, sin ningún tipo de evidencia, dándole el grado de



certeza. No obstante, dentro del expediente se observa todo lo contrario porque la juzgadora no analizó las constancias que integran el juicio, pues se menciona que el recurrente no ha cumplido con la pensión lo que es falso toda vez que existe una preliminar de consignaciones en el expediente 360/2021 del índice del Juzgado Primero de éste Distrito Judicial; que también da valor probatorio a la afirmación que el recurrente no tiene interés en ver a la menor, siendo éste quien inició el procedimiento; que nunca se acreditó que el recurrente hubiere amenazado a la parte contraria con llevarse a la menor involucrada en el juicio, por el contrario, lo que hizo fue a través de los medios jurídicos a su disposición un régimen de visitas que le permita llevar a su hija a visitar a sus abuelos; es por ello que solicita se revoque el auto combatido. - - - - -

Previo al estudio de los motivos de disenso formulados por **** ***** ****, en contra del auto que hoy motiva la apelación, cabe advertir que en el asunto que nos ocupa, se encuentran involucrados los derechos de la infante de iniciales **M.E.G.C.**, por lo que la sentencia que en el presente toca se dicte deberá proteger el interés superior de la citada menor de edad, ante lo cual, esta Sala atendiendo a la facultad conferida por los artículos 680-A y 982 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, procede a suplir en su beneficio los motivos de inconformidad que se encuentran expresados única y exclusivamente en lo que a la infante se refiere.- - - - -

Lo anterior, porque en ese sentido obliga a esta Sala la Jurisprudencia por Contradicción de tesis número 106/2004-PS,

correspondiente a la Novena Época, con registro 175053, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XXIII, Mayo de 2006, en materia Civil, en que se localiza la tesis 1a./J. 191/2005, visible en la página 167, cuyo rubro y texto a la letra se agregan:- - - - -

"MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." - - - - -

Que una vez analizado el agravio que hace valer **** *****
***** ****, suplido en su deficiencia de conformidad con el



artículo 680-A del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para este Órgano Colegiado resulta infundado para modificar o revocar el auto recurrido, en atención a los razonamientos siguientes:- - - - -

Se justifica lo anterior, toda vez que analizadas las constancias que integran el testimonio del juicio natural motivo de la presente apelación, el cual tiene valor probatorio en términos de los artículos 334 fracción VIII y 400 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se advierte que la juzgadora natural no violentó los artículos que invoca el recurrente en su escrito de agravio, toda vez que, contrario a ellos, es correcta la determinación de la Juez Segundo en materia Familiar de éste Distrito Judicial, ya que en relación al caso concreto, y toda vez que dentro de nuestro Código Civil, existen prerrogativas y obligaciones legalmente reconocidas al padre y a la madre, como es el derecho que tienen los progenitores a ejercer la guarda y custodia de los hijos, como lo establece artículo 4º, Noveno párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que establece: - - - - -

“Artículo 4º, Noveno párrafo.- En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”- - - - -

Por ende y atendiendo a los fines que persigue el interés superior de los menores de edad, se encuentra el bienestar, el cual se traduce en asegurar las mejores condiciones de su

entorno familiar que pudieran favorecer su estado emocional, desarrollo integral y muchos aspectos relacionados con su felicidad. De igual manera y con la facultad que otorga a los juzgadores los artículos 981, 982 y 983, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, y observando en forma absoluta las garantías individuales que a favor de los menores de edad consagran los artículos 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 1 al 41 de la Convención Sobre los derechos del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos de Norteamérica y ratificada por el Estado Mexicano el 21 veintiuno de septiembre de 1989 mil novecientos ochenta y nueve, la cual es obligatoria en cuanto a su observancia por parte de los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 133 Constitucional, atendiéndose incluso a las prevenciones del Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables para el Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, exposiciones que establecen la necesidad de allegarse de una legislación encaminada a la protección de los derechos de los menores de edad, que a su vez fuesen tutelados no solamente por instituciones especializadas y específicas, sino por los tribunales de justicia y toda la sociedad, para integrarlos plenamente a ella y permitirles el goce pleno de sus derechos como seres humanos. - - - - -

Ahora bien, el artículo 982 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, gramaticalmente dispone:- - - - -

***“Artículo 982.-** Conocerán de este juicio los Jueces de lo Familiar, en donde no los haya conocerán los Jueces de lo Civil o de*



Jurisdicción Mixta, que estarán facultados para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niñas, niños, adolescentes e incapaces, y se soliciten por razón de parentesco, deberá demostrarse en éste, con las actas certificadas de matrimonio o de nacimiento o en su caso con los exámenes correspondientes, así como todas las pruebas pertinentes para tal efecto. - - - - -

Si se funda en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que conste.- - - - -

Para decretar alimentos a favor de quien tenga derecho de exigirlos se justificará con el título o causa jurídica en cuya virtud se piden y las posibilidades de quien debe darlos. - - - - -

El Juez que conozca de la litis al comprobar el parentesco del acreedor alimentario con la parte demandada, y en virtud de la urgente necesidad, de oficio, decretará una pensión alimenticia provisional. - - - - -

*Y de cuestiones relacionadas con la violencia familiar, decretando las medidas que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros. **Debiendo tomar en cuenta en todo momento el interés superior del niño. En todos los asuntos del orden familiar, los jueces y tribunales están obligados a suplir la deficiencia de los planteamientos de derecho de las partes.** En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento. (Lo subrayado es nuestro)*" - - - - -

A mayor abundamiento, cabe patentizar que la Convención Sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el diecinueve de junio de mil novecientos noventa, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio del mismo año; promulgada por el Ejecutivo Federal y publicada en el referido órgano de difusión oficial gubernamental el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno; del que es conveniente citar los artículos 3º numerales 1 y 2, 6º, 7º, artículo 8º numerales 1 y 2, y artículos 9º numerales 1 al 3, 18º y 19º, que señalan lo siguiente: - - - - -

Artículo 3.-----

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. -----

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. -----

Artículo 6 -----

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. -----

Artículo 7.-----

1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. -----

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.-----

Artículo 8.-----

1.- Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. -----

2.- Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad...”-----

Artículo 9.-----

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por



ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. -----

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. --- -----

Artículo 18 -----

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. -----

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas. --- -----

Artículo 19. -----

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. -----

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.” -----

En ese mismo orden de ideas, deviene importante señalar que la Declaración de los Derechos del Niño, misma que fue aprobada el 20 veinte de noviembre de 1959 de manera unánime por los 78 setenta y ocho Estados miembro que componían entonces la Organización de las Naciones Unidas, está basada a su vez en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, de 1924, y recoge 10 principios. En la que se destaca que "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento..." - - -

Por su parte, el Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables para el Estado Libre y Soberano de Chiapas, en sus artículos 1 y 2 fracción XXVI, establecen lo siguiente: - - - - -

***"Artículo 1°.-** Este Código se aplicará en el Estado de Chiapas; sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto crear y establecer las bases y procedimientos de prevención, asistencia y atención a la mujer, el menor, el adulto mayor, la familia y persona o grupos vulnerables; instrumentando la concurrencia y colaboración de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como la participación de los sectores social y privado."* - - - - -

***"Artículo 2°.-** Para los efectos de este Código se entenderá por: "... XXVI. **Niñas, Niños y Adolescentes:** A las niñas y niños recién nacidos, hasta antes de los 12 años de edad y adolescentes desde los 12 años de edad hasta antes de cumplir los 18 años de edad..."* -

Así también, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, contempla en sus artículos 2º fracciones IV y V, 6º, 7º, 15º fracciones I, IV y VII, 48º y 51º, el interés superior del menor, estableciendo lo siguiente: - - - -

***"Artículo 2°.-** Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades del Estado y de los municipios realizarán las acciones y tomarán medidas necesarias, de conformidad con los principios establecidos en la Ley General de los*



Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en la presente Ley. Para tal efecto, deberán:

I...

(...)

IV. Considerar de manera primordial el interés superior de la niñez, en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

V. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, la autoridad competente deberá evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. (...)

Artículo 6°.- *Se consideran niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.*

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente; y en caso de que exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. - - - - -

Artículo 7°.- *A fin de garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades del Estado y los municipios se regirán y aplicarán la presente Ley de conformidad con los siguientes principios rectores:*

I. El interés superior de la niñez.

II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales.

III. La igualdad sustantiva. IV. La no discriminación.

V. La inclusión.

VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

VII. La participación.

VIII. La interculturalidad.

IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades.

X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales.

XI. La autonomía progresiva.

XII. El principio pro persona.

XIII. El acceso a una vida libre de violencia. XIV. La accesibilidad.

XV. Diligencia excepcional dentro de las medidas especiales de protección. - - - - -

Artículo 15.- *Para efectos de la presente Ley, son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:*

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

II....

III...

- IV. Derecho a vivir en familia.
- V...
- VI.
- VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral.
- VIII...
- (...)

Artículo 21.- Las niñas, niños y adolescentes desde su nacimiento, tienen derecho a:

- I...
- II...
- III...
- IV. Vivir y crecer en el seno de una familia, a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, aún cuando haya necesidad de ser separado de los mismos, siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez.**
- V...
- (...) -----

Artículo 48.- Las Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. –

Artículo 51.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. (...)” -----

De los artículos invocados de las referidas codificaciones se colige que, el **interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica dar prioridad al bienestar de éstos, ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio,** verbigracia: la patria potestad, guarda y custodia, el derecho de visita y alimentos. -----

Para soportar la justificación que precede, cobra aplicación la Jurisprudencia bajo registro número 162807, aprobada por la Primera Sala del más Alto Tribunal, en Materia Constitucional, visible a página número 616, tomo XXXIII, Febrero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del epígrafe siguiente:-----

“INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. *En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión.”- - - - -*

Sentado lo anterior, y del análisis practicado al auto recurrido, cabe decir que el motivo de disenso hecho valer por el apelante, resulta totalmente infundado, toda vez que la jueza natural, de forma correcta decretó la guarda y custodia provisional de la menor de iniciales **M.E.G.C.**, a cargo de su progenitora *** *****; se justifica lo anterior, ya que los artículos 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numerales 1 y 2, 9, numerales 1 a 3 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 2º, 3º y 18 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, contemplan que los órganos jurisdiccionales deben atender al principio del interés superior de la infancia, y por cuanto en el caso que se estudia la menor involucrada a la fecha del pronunciamiento del auto apelado, contaba con la edad de 04 cuatro años y 04 cuatro meses aproximadamente, como se advierte de su atestado de nacimiento con identificador electrónico 07101000120210028193, expedido por el Director del Registro Civil del Estado de Chiapas, documental pública que tiene valor en términos de los artículos 334 fracción II y 398 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de la que se

advierte que la citada infante es hija de **** ***** ***** **** y ***
***** ***** *****; que la menor de edad nació el 23 veintitrés de
noviembre de 2019 dos mil diecinueve; que la citada menor de
edad se encuentra viviendo únicamente con su progenitora desde
aproximadamente febrero de 2021 dos mil veintiuno, como se
advierte de los hechos de la demanda y de la contestación de la
confesional a cargo de la progenitora, así como lo manifestado por
ésta en su escrito de 14 catorce de mayo del actual, por lo tanto,
la determinación que hizo la juzgadora de origen, fue atendiendo
a los principios invocados en líneas que anteceden, con base en
el interés superior de la menor de edad involucrada en el juicio
natural; aunado a que si bien es cierto actualmente la infante de
iniciales **M.E.G.C.**, en la fecha del inicio del juicio se encontraba
viviendo con ambos progenitores, el presente asunto se instó por
el recurrente en octubre de 2021 dos mil veintiuno; es decir, que
desde febrero del citado año, la infante vive con su progenitora;
lo anterior, conduce a advertir que la infante de iniciales
M.E.G.C., desde su nacimiento ha estado con su progenitora,
porque como ambas partes manifiestan el ahora apelante trabaja
de forma foránea y no puede tener convivencia física con la
menor de edad, de ahí que tiene autorizado provisionalmente el
régimen de convivencias bajo la modalidad a distancia, como se
determinó en auto de 8 ocho de diciembre de 2023 dos mil
veintitrés y se confirmó por éste Tribunal de Alzada en
resolución de 20 veinte de febrero de 2024 dos mil veinticuatro, y
por cuanto únicamente en periodos de vacaciones que le
otorguen en su trabajo puede trasladarse a ésta ciudad, a
petición del recurrente, la juzgadora natural le autorizó al ahora
recurrente régimen de convivencia a la menor de edad con el
hoy recurrente, como consta en auto de 12 doce de abril de



2024 dos mil veinticuatro, en el que se autorizaron los días 25 veinticinco, 26 veintiséis, 29 veintinueve y 30 treinta de abril del año en curso; sin embargo, el recurrente mediante promoción de 23 veintitrés de abril del presente año, manifestó no poder presentarse en las fechas antes señaladas por cuestiones de errores laborales, solicitando fechas para el mes de julio, ante dicha solicitud la juzgadora natural ordenó que las fechas solicitadas serían autorizadas siempre que el recurrente acreditara con documentación idónea la posibilidad real de asistir a las convivencias que solicita; por ello, la determinación de la juzgadora natural a **otorgar de manera provisional la guarda y custodia de la menor de edad de iniciales M.E.G.C., a su progenitora *** *******, se comparte por éste Órgano Colegiado, en virtud que en las contiendas familiares como la guarda y custodia y/o régimen de visitas y convivencias, se involucran derechos fundamentales del niño, niña o adolescente, como es su derecho a convivir con sus progenitores, así como a encontrarse bajo el cuidado del que resulte más apto para lograr su bienestar; de ahí que la decisión judicial que se tome incidirá en su esfera jurídica, por lo que los órganos jurisdiccionales deben asegurar las mejores condiciones para que su entorno familiar pueda favorecer su estado emocional y aspectos relacionados con su felicidad, aun cuando los niños, niñas o adolescentes, no formen parte material del litigio, pues sus derechos personales, conforme al interés superior de la menor de edad de iniciales **M.E.G.C.**, deben ser considerados en su individualidad, o en sus derechos dependientes de los adultos por su estado de vulnerabilidad o discapacidad; lo anterior se traduce en que el auto recurrido no es violatorio de la garantía de audiencia que adolece el

recurrente, pues la A quo, no viola en perjuicio del apelante ni de la menor de edad, los artículos 1º en relación con el 4º Constitucional, así como los artículos 3, 5, 8, 9, y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que contrario a lo argüido por el inconforme, la juzgadora natural veló por el interés superior de la menor involucrada en el juicio, así como tampoco violentó el derecho de la menor respecto a la convivencia con la familia ampliada, toda vez que en ningún momento del auto recurrido se advierte que la primiinstancial prohibiera la convivencia con éstos, además se itera, la guarda y custodia decretada a la progenitora es **PROVISIONAL**, la cual conforme a las etapas procesales del juicio que se ventila es tendente a cambiar. - - - - -

Al respecto, el arábigo 256 del Código Sustantivo Civil del Estado, señala que: *“tratándose de hijos cuya edad sea inferior a siete años, aún en los casos de divorcio o de otras acciones, se mantendrán al cuidado de la madre, salvo pacto en contrario o peligro para el normal desarrollo de los hijos; deberá tomar en cuenta la opinión de la niña, niño que estén en condiciones de formarse un juicio propio, prevaleciendo en todo momento el interés superior del niño”*. - - - - -

Así, de acuerdo con el legislador, salvo peligro grave, los niños menores de dicha edad no están preparados plenamente para realizar actividades y juicios de valoración independientemente, por lo que requieren del cuidado de la madre, por ser ésta la que cumple de mejor forma las responsabilidades y obligaciones materiales inherentes a la atención y cuidado de los hijos y satisfacción de sus



necesidades básicas, vitales, espirituales, afectivas y educativas aun cuando carezcan de recursos económicos, con excepción de los casos en los que la madre ejerza violencia familiar contra los menores o ponga en riesgo su normal desarrollo; por ello lo manifestado por el recurrente en el sentido que debió haber sido llamada la menor de edad de iniciales **M.E.G.C.**, para que manifestara respecto la determinación de la juzgadora deviene infundado. - - - - -

Si bien el recurrente aduce que la jueza natural actuó ilegalmente toda vez que fue parcial con lo determinado en el auto recurrido, ya que consideró lo manifestado por la parte contraria en que éste no ha cumplido con los deberes alimentarios, que ha querido sustraer a su hija menor de edad y que no se le dio el derecho de audiencia respecto a dicha determinación; al respecto, dichas manifestaciones subjetivas carecen de consistencia jurídica ya que el auto que recurre, no es violatorio de los artículos invocados en el auto combatido, toda vez que el precitado auto se dictó atendiendo el interés superior de la menor de edad de iniciales **M.E.G.C.**, pues se itera, la citada infante desde su nacimiento y desde la fecha en que el hoy apelante no ve a la menor de edad, ésta ha desenvuelto en el entorno materno, que si bien como lo sostiene la Primera Sala del más alto Tribunal de la Nación, no existe ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores, pues, en principio, tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. Así las cosas, el intérprete, al momento de aplicar el artículo 412 del Código Sustantivo Civil del Estado, que dispone que:“...*si no se*

llega a ningún acuerdo respecto a la guarda y custodia, el juez de lo familiar resolverá lo conducente tomando en cuenta la opinión del o de los hijos que estén en condiciones de formarse un juicio propio". Lo anterior significa que la decisión judicial al respecto no sólo deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para la menor de edad, sino, por el contrario, deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para ésta. La dificultad estriba en determinar y delimitar el contenido del interés superior del menor de edad, ya que no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta; la dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada y es dicha dinámica, así como las consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en los integrantes de la familia, la que determinará cuál es el sistema de custodia más beneficioso para los menores de edad. - - - - -

Así las cosas, en el caso en estudio, la jueza natural sí valoró las especiales circunstancias que concurren en cada progenitor es por ello que acertadamente determinó cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad de la menor de edad de iniciales **M.E.G.C.**, que en el auto combatido lo fue **decretar provisionalmente la guarda y custodia de la infante a su progenitora** *** ***** *****; sin que obste lo manifestado por el recurrente en su escrito de agravio que por la juzgadora consideró que éste no ha cumplido con el pago de pensión alimenticia, toda vez que dicha circunstancia no se consideró para decretar provisionalmente dicha medida, sino que la misma se hizo atendiendo el interés superior de la menor involucrada en el juicio, sin que dicha



medida provisional perjudique el derecho de convivencia y visita otorgado al recurrente; es por ello que, la juzgadora natural, atendiendo el interés superior de la menor de edad otorgó la guarda y custodia provisional de la infante de iniciales **M.E.G.C.**, a cargo de su progenitora *** ***** *****, sustentando dicha determinación en el artículo 4º Constitucional, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 3, 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 24, 25, 29 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, así como el artículo 981 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como la jurisprudencia con registro digital número 2006227¹.

En el caso en estudio resulta importante recalcar que es innegable que en los primeros meses y años de vida, las previsiones de la naturaleza conllevan una identificación total de los hijos con su progenitora, y no sólo nos referimos a las necesidades biológicas de los menores en cuanto a la alimentación a través de la leche materna, sino, y como lo han desarrollado diversos especialistas en la materia a nivel internacional, el protagonismo de las madres en la conformación de la personalidad de sus hijos durante la primera etapa de su vida resulta determinante en el desarrollo de su conducta hacia el futuro. En esta lógica, la determinación de la guarda y custodia **provisional** a favor de la progenitora está basada en la preservación del interés superior de la menor de edad de iniciales **M.E.G.C.**, el cual, como ya señalamos, resulta el criterio proteccionista al que se debe acudir. Esta idea, además,

¹ Registro digital: 2006227, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a./J. 31/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 451, Tipo: Jurisprudencia, de rubro siguiente: **INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA.**

responde a un compromiso internacional del Estado mexicano contenido en el artículo 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que señala lo siguiente: - - - - -

*“Artículo 16. **Derecho de la niñez.** Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” - - - - -*

Bajo ese hilo de ideas, para quienes ahora resuelven, la medida decretada en el auto combatido es provisional y que la misma puede ser modificada en la secuela procedimental; por ello el auto recurrido no es violatorio de la garantía de audiencia que aduce el recurrente que no se le escuchó en juicio antes de decretar dicha medida combatida, pues si bien esta garantía se conoce como el derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída, con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable, por la autoridad competente previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones, al disidente **** ***** ****, en ningún momento se le ha transgredido ese derecho, puesto que contrario a lo que éste manifiesta, el auto recurrido se dictó en atención al interés superior de la menor de edad, y dicha determinación no lo deja en estado de indefensión, ya que se itera dicha medida es provisional; por lo antes expuesto, la medida provisional decretada el auto combatido deviene correcta sin que se advierta que la jueza natural, se hubiere extralimitado en sus



funciones; razón por la cual, resulta infundada la inconformidad planteada.-----

Robustece las anteriores consideraciones la Jurisprudencia con registro digital número 2006790, aprobada por la Primera Sala del Mas Alto Tribunal, en Materia Constitucional, Civil; Tesis: 1a./J. 52/2014 (10a.), Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 215, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: -----

“GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. EL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, INTERPRETADO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES CONSTITUCIONAL. El artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México, establece que: "Cuando sólo uno de los que ejercen la patria potestad deba hacerse cargo provisional o definitivamente de la guarda y custodia de un menor, se aplicarán las siguientes disposiciones: I. Los que ejerzan la patria potestad convendrán quién de ellos se hará cargo de la guarda y custodia del menor. II. Si no llegan a ningún acuerdo: a) Los menores de diez años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el menor.". A juicio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta porción normativa resulta constitucional, siempre y cuando se interprete a la luz del interés superior de los menores y del principio de igualdad. En primer término, es necesario señalar que al momento de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales y, cabría agregar, este criterio proteccionista debe reflejarse también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En esta lógica, el legislador puede optar por otorgar preferencia a la madre en el momento de atribuir la guarda y custodia de un menor; sin embargo, este tipo de normas no deben ser interpretadas en clave de un estereotipo en el que la mujer resulta, per se, la persona más preparada para tal tarea. Es innegable que en los primeros meses y años de vida, las previsiones de la naturaleza conllevan una identificación total del hijo con la

madre. Y no sólo nos referimos a las necesidades biológicas del menor en cuanto a la alimentación a través de la leche materna, sino, y como lo han desarrollado diversos especialistas en la materia a nivel internacional, el protagonismo de las madres en la conformación de la personalidad de sus hijos durante la primera etapa de su vida resulta determinante en el desarrollo de su conducta hacia el futuro. En esta lógica, la determinación de la guarda y custodia a favor de la mujer está basada en la preservación del interés superior del menor, el cual, como ya señalamos, resulta el criterio proteccionista al que se debe acudir. Esta idea, además, responde a un compromiso internacional del Estado mexicano contenido en el artículo 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora bien, como también señalan los expertos, pasado cierto periodo de tiempo, se opera un progresivo proceso de individuación del niño a través de la necesaria e insustituible presencia de ambos progenitores. El menor necesita tanto de su madre como de su padre, aunque de modo diferente, en función de la edad; ambos progenitores deben hacer posible y propiciar la presencia efectiva de esas funciones simbólicas en el proceso de maduración personal de los hijos.” - - - - -

En esa tesitura, este órgano colegiado considera que lo procedente es **confirmar** el auto recurrido.- - - - -

Por lo expuesto y fundado en el artículo 663 del Código de Procedimientos Civiles, esta Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil:- - - - -

R E S U E L V E:

PRIMERO: Se **CONFIRMA** el auto de 17 diecisiete de mayo de 2024 dos mil veinticuatro, dictado por la Jueza Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de TUXTLA; en los autos del expediente número **1141/2021**, relativo a la **VIA DE**



CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR (RÉGIMEN DE VISITA Y CONVIVENCIA), promovido por **** ***** ***** **** en contra de *** ***** ***** ***** . - - - - -

SEGUNDO: Remítase testimonio de la presente resolución al juzgado de origen, para su conocimiento y efectos legales procedentes; oportunamente archívese el toca como asunto concluido; Notifíquese y Cúmplase. - - - - -

Así lo resolvieron los Ciudadanos Magistrados que integran la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Licenciados GUILLERMO HORACIO ESPONDA ORANTES, MARIA ITZEL BALLINAS BARBOSA, y CLAUDIA LUCIA DOMINGUEZ ACUÑA, siendo presidenta la tercera de las nombradas y ponente el primero de los citados, y firman por ante la licenciada CLAUDIA VIDAL HERNANDEZ, Secretaria General de Acuerdos de ésta Sala, que da fé.-
GHEO/DDAY/gmml.

MAGISTRADA PRESIDENTA

LIC. CLAUDIA LUCIA DOMINGUEZ ACUÑA.

MAGISTRADA PONENCIA “A”

MAGISTRADO PONENCIA “B”

**LIC. MARIA ITZEL BALLINAS BARBOSA. LIC. GUILLERMO HORACIO ESPONDA
ORANTES.**

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS:

LIC. CLAUDIA VIDAL HERNANDEZ.

ELIMINADO: 26 elementos. FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 6, apartado A, fracción II y 16 párrafo segundo de la constitución política de los Estado Unidos Mexicanos; 3 de la Constitución Política del estado libre y Soberano de Chiapas; 100, 106 fracción III, 107 y 116 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6 de la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 134, 139, y 140 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; 4 fracción II, 12 y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas; Séptimo fracción III y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. MOTIVO: se trata de información confidencial concerniente a datos personales identificativos.